

CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron por el recurso el abogado señor Juan Pablo Gómez y contra el recurso los abogados señor Hernán Fernández, señora Marcela Prieto y señor Hiram Villagra. San Miguel, 15 de abril de 2024. Pablo Villar Maureira, Relator. (Hora de inicio 09:29 – Hora de término 10:22 am).

San Miguel, quince de abril de dos mil veinticuatro.

A lo escritos de folios 7, 9, 10 y 11: téngase presente.

Al escrito de folio 8: a lo principal, primer, tercer y cuarto otrosí: téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Juan Pablo Gómez Concha, defensor penal público, en representación de **Gonzalo Andrés de la Costa Lara**, interpone recurso de amparo en contra de la resolución de cinco de abril del presente año, dictada por el magistrado del 12° Juzgado de Garantía, Marcelo Ignacio Ovalle Bazán, en causa RIT 4503-2020, la cual dio lugar a la solicitud de prisión preventiva requerida por las partes querellantes.

Señala que el magistrado en la resolución recurrida no cumplió con el deber de fundamentar las resoluciones judiciales previsto en el artículo 143 en relación al artículo 36 del Código Procesal Penal, y que no se pronunció sobre algunas alegaciones de la defensa, infringiendo el principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 76 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Expone que el imputado fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de apremios ilegítimos, previsto en el artículo 150 e) N°2 en relación con el artículo 150 d) del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado, en calidad de autor por los siguientes hechos: ““El día 11 de septiembre de 2020, alrededor de las 23:00 horas, en las mediaciones de la intersección de calle Darwin con Las Industrias, comuna de San Joaquín, el imputado Gonzalo Andrés de la Costa Lara, en el ejercicio de sus funciones como oficial de Carabineros y en forma contraria a todo protocolo que regla el uso de la fuerza por parte de dicha institución, utilizó una escopeta antidisturbios la que disparó injustificadamente en contra de la víctima Claudio Ángel Araya Fernández, quien resultó con lesiones graves gravísimas, consistente en trauma ocular grave en ojo derecho retinopatía escleropetaria con ceguera profunda en dicho ojo según diagnóstico médico, emitido por el Hospital El Salvador”.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXBQXMZQMBY

Agrega que el Ministerio Público no solicitó la cautelar de prisión preventiva, sino que las del artículo 155 letras d) y g) del Código Procesal Penal, esto es las de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Refiere que se solicitó y fijó audiencia de sobreseimiento debido a que a su juicio no existe nexo causal entre la lesión a la víctima y el disparo que habría efectuado el imputado, existiendo contradicciones en cuanto al trayecto y ubicación de la víctima y la distancia del disparo, situándola a 100 metros de distancia, a 10 o 20 metros y a quemarropa, de acuerdo a distintos relatos que ésta ha entregado. Sostiene que lo relatado por la víctima se controvierte con el material audiovisual recabado de las cámaras corporales del personal policial que participó en el procedimiento. Asimismo, refiere que existe contradicción en cuanto al número de impactos balísticos que recibió la víctima y respecto a la hora de los hechos. Finalmente, refiere que la lesión ocular puede haber sido un perdigón de uno de esos manifestantes, una piedra u otro elemento.

Además, destaca la hoja de vida y trayectoria del imputado señalando sus buenas calificaciones y felicitaciones, ausencia de castigos.

En cuanto a la alegación de la querellante de estar involucrado en otras causas por hechos similares, sostiene que por su rango es el funcionario a cargo por lo que no resulta extraño que aparezca nombrado en otros procedimientos.

Respecto a la resolución recurrida, señala que no existe en la misma enunciación alguna respecto de cual o cuales fueron los antecedentes de investigación y elementos probatorios obtenidos en esta etapa procesal por el persecutor que fundan la concurrencia de los diversos elementos del delito, ni se precisan los elementos normativos que se contienen en la norma penal aludida en cuanto a cuáles serían los reglamentos respectivos incumplidos, agregando que, a su juicio, la propia formalización no entrega pautas suficientes para adscribir la conducta imputada a la norma indicada. Finaliza adicionando que la resolución recurrida no hace referencia a la falta de causalidad alegada por su parte.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña Angélica María Palacios Rioseco, Jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago indicando que el 5 de abril pasado, fue formalizado el amparado por el delito Lesiones graves gravísimas con ocasión de apremios ilegítimo, previsto y sancionado en el artículo 150 e) N°2 en relación con el artículo 150 d) del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado, en calidad de autor.

Señala que, previo debate, el juez decidió fundadamente acoger la solicitud del persecutor e imponer respecto del amparado cautelar de prisión preventiva, fijó un plazo de investigación de 90 días y a petición de la



defensa se agendó para el 9 de mayo de este año, audiencia de sobreseimiento, y finaliza agregando que el 8 de abril se llevó a efecto audiencia de traspaso de unidad penal del amparado, siendo trasladado al C.P. Sucre.

Tercero: Que, en la especie, la parte recurrente acusa la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución dictada por el magistrado del 12° Juzgado de Garantía, Marcelo Ignacio Ovalle Bazán, en causa RIT 4503-2020, que decretó la prisión preventiva del amparado.

Cuarto: Que el artículo 21 de la Carta Fundamental dispone *“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”*.

Con arreglo a lo estatuido en la referida disposición, de constatarse alguna de las hipótesis, la sentencia que resuelva el recurso estará dirigida a recuperar el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.

Quinto: Que, para resolver, es necesario considerar la excepcionalidad de la acción de amparo al momento de optar dentro de la diversidad de recursos procesales que contempla el ordenamiento jurídico a favor de quien pretende alzarse en contra de una resolución judicial.

Sexto: Que, en el caso de autos, es necesario poner de relieve que la resolución cuestionada se adoptó por tribunal competente, en uso de sus facultades legales y con la debida fundamentación, previo debate de las partes en la audiencia en cuestión, de manera que no queda sino concluir que la presente acción constitucional no puede prosperar.

A mayor abundamiento, el argumento del recurrente en atención a que la resolución dictada por la recurrida adolecería de falta de fundamentación, se encuentra desvirtuado por el propio registro de audio, en el cual consta el razonamiento que sustentó el juez recurrido.

De otra parte lo alegado por el señor defensor en el sentido de haber optado por esta vía en razón de los fundamentos enarbolados para obtenerla, no obsta a su posibilidad de apelar de la resolución que estima agravante.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, **se rechaza**, sin costas, el recurso de amparo deducido en



favor de **Gonzalo Andrés de la Costa Lara**, en contra del magistrado del
12° Juzgado de Garantía, Marcelo Ignacio Ovalle Bazán.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°264-2024 Amparo.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXBQXMZQMBY

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B., Claudia Lazen M. y Fiscal Judicial Tita Aranguiz Z. San Miguel, quince de abril de dos mil veinticuatro.

En San Miguel, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

